

ISSN: 2773-7349

Sociedad & Tecnología

Revista del Instituto Tecnológico Superior Jubones

2021

Volumen / 4

Número / S2

Noviembre





El accionar del Estado ecuatoriano en el derecho de repetición

The actions of the ecuadorian state in the right of repetition

Alfredo Fabián Carrillo

E-mail: alfredocarrillo@indoamerica.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/signin>, <https://orcid.org/0000-0001-5197-8760>

Universidad Tecnológica Indoamérica. Ambato, Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Carrillo, A. F. (2021). El accionar del Estado ecuatoriano en el derecho de repetición. *Revista Sociedad & Tecnología*, 4(S2), 710-722.

RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo analizar la responsabilidad del Estado ecuatoriano respecto al derecho de repetición, cuando existe dolo o culpa grave provocado por sus servidores públicos a un particular, para lo cual se desarrolló un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, sustentada en los métodos exegético, revisión documental y revisión bibliográfica, así como en la técnica de análisis de contenido. Entre los principales hallazgos se encuentran la responsabilidad del Estado por las acciones y omisiones de sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, correspondiéndole la reparación del daño provocado a los particulares violentados, siempre y cuando, esto sea dispuesto en sentencia por la autoridad competente. La responsabilidad que adquiere el Estado se tipifica en civil, administrativa y penal. El derecho de repetición surge cuando el daño que se ha reparado es imputable a hechos, actos u omisiones de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos; este puede ser aplicado para recuperar la pérdida económica ocasionada al Estado. Entre las reparaciones posibles están la patrimonial, la no patrimonial y las integrales.

Palabras Clave:

Derecho de repetición, derechos humanos, estado ecuatoriano, responsabilidad, servidores públicos

ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the responsibility of the Ecuadorian State regarding the right of repetition, when there is intent or gross negligence caused by its public servants to an individual, for which a descriptive study with a qualitative approach was developed, supported by exegetical methods, documentary review and bibliographic review, as well as in the content analysis technique. Among the main findings are the responsibility of the State for the actions and omissions of its public servants in the exercise of their functions, corresponding to the reparation of the damage caused to the violated individuals, as long as this is established in a sentence by the competent authority. The responsibility acquired by the State is classified as civil, administrative and criminal. The right of repetition arises when the damage that has been repaired is attributable to facts, acts or omissions of public servants in the performance of their

duties; this can be applied to recover the economic loss caused to the State. Among the possible repairs are the patrimonial, the non-patrimonial and the integral ones.

Key words:

Right of repetition, human rights, Ecuadorian state, responsibility, public servants

INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) determina la responsabilidad de los servidores público; dejando claro que el Estado es responsable de las actuaciones de estos. Frente a las violaciones de derechos a particulares, él deberá responder y reparar los daños provocados por sus agentes estatales, así como recuperar el valor cancelado como indemnización al afectado, pudiendo ejercer el derecho de repetición como un deber irrenunciable y no potestativo en contra de estos servidores o ex servidores públicos.

Hay que recalcar que el Estado es responsable de las acciones u omisiones cometidas por parte de sus servidores públicos que afectan de manera directa los derechos de las personas y provoca pérdidas económicas al país, las que en ocasiones no son recuperables mediante la acción de repetición que faculta la norma legal.

En este mismo orden de ideas Paredes (2017) señala:

Los funcionarios y el estado conforman una sola unidad por tal razón; si uno de los funcionarios comete un acto indebido, compromete de manera inmediata al Estado, porque la culpa de sus agentes, cualquiera que éstos sean, es su propia culpa (p.43).

Una vez que se evidencia la responsabilidad del Estado, este tiene la obligación de reparar a la persona afectada; esta puede ser psicológica o económica según el caso, lo que se determina mediante una sentencia emitida por la autoridad

competente, dando derecho al Estado a seguir la acción de repetición en contra del servidor público que violentó el derecho.

El Estado ecuatoriano responde no solo por las acciones u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, también, por aquellos daños producidos por la ineficiente prestación de servicios públicos que perjudique y violente los derechos de los particulares, quienes no tendrán la obligación jurídica de soportar tal daño. Ahora bien, para que el Estado se haga responsable de las actuaciones de sus funcionarios deben existir tres requisitos: 1) el daño, 2) el nexo causal y 3) los títulos de imputación, aquellos que podrán probar la obligación de reparar los daños a la víctima.

El derecho de repetición es una acción que está consagrada en la CRE y amparada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del 2009, donde se establece el procedimiento para ejercer la acción de repetición contra servidoras y servidores públicos, delegatarios y concesionarios, quienes están obligados a reparar las violaciones cometidas contra los derechos de los particulares.

Luego, el derecho de repetición es considerado como una herramienta legal que ayuda al Estado a implementar el derecho de repetir en contra de los funcionarios públicos que hayan ocasionado daños y perjuicios a la propiedad pública o privada, por sus acciones u omisiones con culpa o dolo, para que se restituya lo cancelado y no afecte la economía del país.

Cabe mencionar que, el derecho de repetición posee varios objetivos, entre ellos está el lograr la recuperación de los recursos económicos que el Estado ha indemnizado a los afectados, según lo determina la CRE, o sea la responsabilidad de cancelación de los daños, pero con el derecho a repetir contra los funcionarios responsables que deberán asumir el pago de dicha indemnización sin tomar en cuenta otros tipos de responsabilidad que recaiga sobre ellos.

En la actualidad, la acción de repetición da la posibilidad a la autoridad competente de pronunciarse sobre el dolo o la culpa grave de los funcionarios o servidores públicos y el grado de responsabilidad de los mismos frente a un daño causado determinando quién responderá por los montos indemnizatorios derivados de las sentencias, siempre y cuando este sea debidamente identificado.

Sin embargo, este tema ha quedado en el vacío y no es una de las prioridades de los gobiernos que se encuentren de turno, ocasionando la institucionalización de la irresponsabilidad del sector público, poniendo en riesgo el progreso del país.

En este contexto se inscribe el presente trabajo con el objetivo de analizar la responsabilidad del Estado ecuatoriano respecto al derecho de repetición, cuando existe dolo o culpa grave provocada por sus servidores públicos a un particular.

El desarrollo del artículo cuenta con seis epígrafes; el primero versa sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano de los errores cometidos por los servidores públicos, el segundo trata sobre los tipos de responsabilidad; un tercero dedicado al derecho de repetición, el cuarto apartado aborda el derecho de repetición desde la perspectiva de la doctrina ecuatoriana, para continuar con el quinto epígrafe referente a la reparación a los particulares que fueron perjudicados por los actos u omisiones de los servidores públicos, asumida por el Estado y por último se analizan los diferentes tipos de reparaciones.

METODOLOGÍA

Para el cumplimiento del objetivo del presente trabajo se desarrolló un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, sustentada en los métodos exegético y revisión documental, que permitieron el examen e interpretación de textos de las normativas relativas al derecho de repetición.

De igual forma, el método de revisión bibliográfica junto a la técnica de análisis de contenido fue utilizados para el estudio de artículos científicos, tesis y libros localizados y recuperados de diferentes repositorios digitales especializados en el tema a través del empleo del buscador Google Académico (Espinoza, 2020). Con los textos estudiados se creó una base de datos de 112 referencias, mediante las cuales se fundamentó teóricamente el estudio.

DESARROLLO

El desarrollo de este artículo inicia por el análisis de la responsabilidad del estado ecuatoriano frente a los errores de los servidores públicos que ha vulnerado los derechos de los particulares.

1. Responsabilidad del Estado ecuatoriano de los errores de los servidores públicos

El Estado ecuatoriano es responsable de las actuaciones de los servidores públicos y judiciales en el ejercicio de sus funciones, quienes son responsables y poseen el deber de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales (Durán Chávez & Henríquez Jiménez, 2021); así como, de realizar una correcta administración, en caso contrario serán responsables por error judicial, aquel que es considerado como el falso concepto que posee el juez respecto de la verdad de los hechos dentro de un proceso; enfatizando que, comprende no solamente los perjuicios producidos al inocente, sino en los errores o faltas que afectan al culpable y pueden incluir tanto el error de hecho como el derecho retardo injustificado o inadecuada administración de justicia.

Además, pueden ser responsable por el error inexcusable, esto significa que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar de hacerse. El error inexcusable, tal como lo explica Cabanellas (1979), se entiende como la equivocación que no tiene disculpa, todo esto resulta perjudicial para aquellos que injustamente fueron procesados.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (2009), el Estado será responsable por el error judicial, así como del retardo injustificado o inadecuada administración de justicia o la violación de los principios y reglas del debido proceso (Redrobán Barreto, 2021); por tal razón, las personas que son injustamente procesadas poseen el derecho a reclamar una indemnización por el daño ocasionado, tal como se encuentra estipulado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es así que se acoge la responsabilidad del Estado en virtud de las actuaciones de la administración de justicia (Asamblea Nacional, 2009 a, art. 32).

Los administradores de justicia, entre ellos los jueces y servidores judiciales, serán responsables por sus actuaciones en el desempeño de sus cargos cuando en el ejercicio irregular de las mismas provoquen un daño a personas; en este caso el Estado se hará cargo de la reparación del mal causado y podrá recuperar los valores empleados en la subsanación a favor de los particulares actuando bajo el derecho de repetición, aspecto que analizaremos en un posterior epígrafe.

Para conocer de mejor manera la actuación del Estado referente al derecho de repetición es necesario conocer la responsabilidad de este frente a las inadecuadas actuaciones de los agentes estatales y la forma de ejercer el derecho que le da la potestad a repetir lo pagado, en miras a su propio interés, denominado interés público, dado en beneficio de la seguridad jurídica de la tramitación del proceso de repetición.

El Estado es responsable de manera directa y total de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de la actividad del Estado, tomando en consideración que estos funcionarios públicos son representantes del Estado, quienes son formados y colocados por él para el desempeño de las funciones de prestación del servicio público, siendo siempre obligación del Estado asumir la reparación del posible daño que pudieran ocasionar estos agentes estatales o funcionarios (Jiménez, 2013; Sammartino, 2016).

Los funcionarios de las instituciones estatales o funcionarios públicos, empleados por el Estado, para el cumplimiento de sus funciones pasan a ser órganos del Estado y tiene la responsabilidad de actuar en nombre de éste, por esta razón, la responsabilidad del estado es siempre directa. Cuando alguno de estos órganos, en el cumplimiento de sus funciones, provocan un daño a particulares, es el Estado el responsable directo del mismo y debe asumir la reparación de los daños causados al particular.

Cabe mencionar que, la responsabilidad directa del estado, se cristaliza cuando uno de sus agentes estatales ya sea por acción u omisión afecta o violenta el derecho de un particular, así también ante la deficiente prestación del servicio público que presta; es por ello que, el Estado asume la responsabilidad, es quien tiene la obligación de indemnizar por el daño provocado a la persona, ya sea económica, moral y psicológicamente (Espín, 2015).

Ante este tipo de responsabilidad la persona afectada puede demandar de manera directa al Estado y solicitar que se le repare, en relación al daño provocado, sin que este proceso implique la individualización del funcionario que ocasionó el daño, en el ejercicio de las funciones asignadas.

La responsabilidad total del Estado, se manifiesta en conductas que ocasionan daños en la ejecución de trabajos públicos o que de una manera anónima son causados por la administración pública o por un prestador de servicios, de tal manera que no se pueda evidenciar un autor humano de manera específica a raíz del cual se individualice el daño provocado (Bernal Corredor, 2017).

Se debe enfatizar que es obligación del Estado resarcir aquellos daños producto de las irregularidades administrativas de los órganos estatales que provoque afectaciones tanto a bienes como a derechos correspondientes a los particulares, estas deberán ser objetivas y directas, para lo cual nace el derecho de los

particulares a una reparación sobre la base de los procedimientos plasmados en la ley.

Ahora bien, ¿cómo se tipifican las responsabilidades que adquiere el Estado ante la vulneración de los derechos de un ciudadano por parte de un agente o funcionario estatal?

2. Tipos de responsabilidades

La responsabilidad patrimonial se clasifica en responsabilidad contractual y extracontractual; la primera se genera a través de las obligaciones contraídas en los contratos, cuyo incumplimiento conlleva a una responsabilidad total por la infracción en el tiempo acordado, evitándose de esta forma posibles sanciones, tomando en cuenta que solamente se puede incumplir los compromisos contraídos a través de contrato como consecuencia de casos fortuitos.

Por otro lado, la responsabilidad contractual del Estado se garantiza a través de las acciones jurídicas, de esta manera se protege la legalidad y el estado de derecho, haciendo de la responsabilidad contractual una acción importante en pro del cumplimiento de la ley.

La responsabilidad contractual del Estado se caracteriza por su completo apego a la política, planes y programas a los que se encauza el cumplimiento de los fines para los cuales se celebró el contrato, garantizando que, los servicios satisfagan plenamente las necesidades de las entidades contratantes y de esta manera velan por los derechos de los ofertantes, es decir, que posean las capacidades financieras, técnicas y legales que se traducen en el cumplimiento total de la celebración del contrato (Hernández Silva, 2008; Paredes, 2017).

Esta responsabilidad se puede dar cuando existen delitos como: el peculado por apropiación, cuando los funcionarios públicos sacan provecho personal de los bienes del Estado, el enriquecimiento ilícito mediante el lucro con bienes del Estado y el tráfico de influencias, considerado como uno de los delitos que más afecta a la responsabilidad contractual del Estado,

pues los funcionarios hacen uso indebido en beneficio propio de las influencias inherentes al cargo que ostentan.

Entonces, el Estado es considerado como el precautelador del cumplimiento de la responsabilidad contractual y de esta manera se garantiza el respeto a la legalidad y a un estado de derechos, elementos que se traducen en orden social, político, económico y jurídico en el país. Mientras que, la responsabilidad extracontractual del Estado se materializa mediante la consecución de acciones erróneas u omisiones de los diferentes órganos estatales.

Hasta aquí, se ha analizado la responsabilidad contractual y la extracontractual, corresponde entonces en este apartado reflexionar sobre las responsabilidades civil, administrativa y penal.

Responsabilidad civil

La responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño ocasionado y de reparar sus consecuencias a través de la indemnización a la víctima (Hernández Fernández et al., 2020), su finalidad es la reparación, esta consiste en reparar los daños a la víctima que sufrió una violación en sus derechos, esta responsabilidad posee un aspecto preventivo, que conlleva a los ciudadanos a actuar con prudencia, a fin de evitar el compromiso de su responsabilidad estatal.

Esta responsabilidad nace al producirse un acto irregular o ilícito en el ámbito de la legislación civil, cuya consecuencia recae en la reparación a las personas que se afectaron por la violación de sus derechos por parte de un agente estatal, tratando de dejar a la víctima en el estado que tenía antes del agravio.

La responsabilidad civil posee la naturaleza propia al tipo de ordenamiento violado, esta es una responsabilidad directa del Estado, pues el accionar del funcionario no se le considera como el de un simple sujeto particular, si no como parte del Estado, ya que actúa en el ejercicio de sus funciones y como resultado causan daño o perjudican a

un particular; por tal razón, se genera una obligación de reparación sea esta económica o psicológica (Posada Urtusuástegui, 2006; Hernández Fernández et al., 2020).

Sobre los servidores públicos recae la responsabilidad civil cuando provocan daños y perjuicios al Estado, ya que, al generar indemnizaciones a particulares por los perjuicios ocasionados; es al Estado, al que afecta en primer lugar y es quien asume la responsabilidad por las acciones cometidas por sus funcionarios, quienes después se convertirían en deudores de lo pagado a consecuencia de los daños ocasionados a los ciudadanos.

Responsabilidad administrativa

La responsabilidad administrativa puede ser entendida como la obligación que tienen los funcionarios públicos de responder por los hechos u omisiones violatorios de las disposiciones administrativas; esta responsabilidad administrativa nace de la inobservancia de los deberes, obligaciones y prohibiciones contenidos en las leyes administrativas, quiere decir que, esta se da cuando no se actuó conforme a lo señalado en la ley y se omitió, por lo tanto, deberá ser responsable administrativamente por su negligencia (Tabares Neyra, 2017; Gutiérrez Castillo, et al., 2019).

Entonces, podemos considerar que, la responsabilidad administrativa es aquella que permite sancionar los actos irresponsables u omisiones de los servidores públicos, cometidos en el ejercicio de sus funciones que perjudica al normal desarrollo de la administración pública.

Responsabilidad Penal

Según acota Pacori (2017), la responsabilidad penal a la que se enfrentan los servidores públicos se da en función al tipo de delito o infracción cometida en el ejercicio de sus funciones. En ella se identifican claramente tres elementos diferentes que la configuran: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el bien jurídico protegido.

Cabe mencionar que, los servidores públicos serán culpables cuando existan casos de dolo o culpa, quienes se deberán someter a las sanciones y medidas para reponer los derechos que han sido vulnerados a los particulares o al propio Estado; pero hay que tomar en consideración que, el servidor público que comete un delito por acción u omisión en el ejercicio de las actividades propias de su cargo, puede adecuar su conducta delictiva de dos maneras, la primera con la conciencia de lo que hizo, teniendo presente las consecuencias lesivas del acto perpetrado y la segunda por conducta grave de sus actos negligentes, con desconocimiento y sin cuidado; según cada caso así será determinada la sanción.

Es así que, la responsabilidad penal es aquella que imputa al culpable de un acto contrario a la ley, realizado con dolo, es decir, con la intención de hacer daño. Según la gravedad del daño se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se prevén, califican y castigan los hechos delictuosos imputables a los funcionarios públicos, ya sea por su participación activa en los mismos o por la mera pasividad ante su deber de intervenir.

Como consecuencia del incumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios estatales, ya sea actuaciones inapropiadas o negligentes que pueden causar daños con o sin intencionalidad, el Estado asume la responsabilidad total. Es decir, cuando el daño se ocasiona a consecuencia de la mala praxis u omisiones de las acciones claramente especificadas en las ordenanzas de los diferentes organismos públicos, este será asumido por el Estado; la sanción no será imputable al agente o funcionario.

Sucintamente, el Estado será responsable de aquellos efectos que causen los actos de sus funcionarios y agentes, cuando se ha verificado la infracción de sus deberes y en consecuencia podrá ejercer el derecho de repetición.

¿Pero, qué es el derecho de repetición?, ¿cuáles son sus particularidades?

3. El derecho de repetición

En el diccionario jurídico de Cabanellas (1979) se define la expresión repetir como aquella acción de reclamar contra un tercero, por algún pago indebido, injusto enriquecimiento, pérdida por evicción e improcedente abono anticipado, esta definición se adecua al concepto jurídico relacionado con la obligación de repetir en contra de los funcionarios públicos que ocasionaron una afectación mediante la culpa grave o dolo provocando responsabilidad directa al estado.

Según menciona Serrano Revelo (2019), el derecho de repetición es:

“una acción para reclamar lo indebidamente pagado o en definitiva aquello que se anticipado por otro. Es decir que el Estado por la mala actuación del servidor público pago determinada cantidad de dinero por concepto de reparación material y en tal efecto el servidor público debe de resarcir lo pagado, esto para reparar a los particulares a quienes se han violentado sus derechos ya por acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones” (p. 2).

Luego, el derecho de repetición es la acción del estado contra los funcionarios públicos condenados a reparar patrimonialmente los daños antijurídicos causados por una conducta activa u omisiva dolosa, la cual es ejercida de manera única y directa contra el servidor o el ex servidor público que accionó grave o dolosamente, perjudicando a un particular y por consecuencia el Estado es el responsable de responder pecuniariamente ante la víctima.

El derecho de repetición es también una acción que se constituye en herramienta legal para garantizar al Estado el derecho a exigir al funcionario público responsable de daños y perjuicios la devolución de lo cancelado por el daño causado.

Resumiendo, el derecho de repetición puede ser entendido como la potestad que tiene el Estado para recuperar los valores que se ha visto obligado a cancelar a favor de los particulares perjudicados o violentados en sus derechos, por aquella actuación irregular u omisión de los

funcionarios públicos; este se da cuando el daño que se ha reparado es imputable a hechos, de los agentes públicos en el desempeño de las funciones. La acción o derecho de repetición, posee el propósito fundamental de alcanzar la eficiencia de la administración pública.

4. La doctrina ecuatoriana y el derecho de repetición

Dentro de la doctrina ecuatoriana el derecho de repetición es considerado como aquella garantía esencial que ayuda a controlar y verificar la manera de actuación de los funcionarios en el cumplimiento de las funciones otorgadas por el Estado y de esta manera poder repetir en caso necesario contra ellos.

Esta acción de repetición es considerada en el país como una figura jurídica a través del ordenamiento jurídico y la norma constitucional, donde se establecen procedimientos específicos y efectivos que ayudan a determinar las responsabilidades. Dentro de la Constitución del 2008 como norma suprema se estableció la posibilidad de repetir contra aquellos servidores públicos responsables y declarar la responsabilidad tanto civil, administrativa como penal según el caso de los servidores públicos, por la comisión u omisión de aquellos actos que perjudicaron a la persona o particular.

De igual forma, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ha determinado como alcance y objeto de la repetición, la potestad del Estado para recuperar los recursos que perdió por el pago de la reparación por acción u omisión de los servidores públicos, donde haya existido culpa grave o dolo, dada la obligación declarada por un tribunal nacional de protección de derechos o por los organismos internacionales de derechos humanos (Asamblea Nacional, 2009 b).

Esta ley se crea con el único fin de regular el procedimiento de acción de repetición contra todo servidor público, ya que la CRE establece: “de existir una sentencia condenatoria al Estado, éste reparará a la persona que haya sufrido daños como

resultado del acto antijurídico cometido con intención o sin ella por la servidora o servidor público, administrativo o judicial, pudiendo repetir en contra de ellos” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, art.11 numeral 9); es decir, la constitución le da al Estado la facultad de repetir la acción para recuperar lo que mediante sentencia canceló a la víctima y cuyos responsables son los servidores públicos quienes deben devolver los valores como medida reparatoria (Alvarado Verdezoto & Melanie Nicole, 2021).

Es así que, el derecho de repetición es una garantía constitucional mediante la cual la administración pública o el Estado, recupera lo indebidamente pagado por las acciones u omisiones a título de dolo o culpa grave de sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, de lo contrario el Estado ecuatoriano se vería perjudicado en su patrimonio y no podría soportar los reclamos y cargas públicas.

Tanto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como el Código Orgánico de la Función Judicial determinan el procedimiento para que se lleve a cabo la acción de repetición en contra de aquellos servidores o ex servidores públicos por la mala administración de justicia y violación de derechos.

En el cumplimiento del derecho de repetición se establece un plazo para que el Estado pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ante la cual puede demandar a sus servidores públicos, ex funcionarios o a los particulares que ejerzan funciones públicas (López Moya, 2021), para que se recupere y se reintegre lo cancelado como medida de reparación a consecuencia de su conducta culposa o dolosa.

Sobre este asunto Muñoz Reinos (2019) y Serrano Revelo (2019) mencionan, el Estado puede reclamar lo que se pagó como indemnización por una irregularidad y daño causado por un agente estatal en el ejercicio de sus funciones, para ello debe hacer uso del derecho de repetición contra el funcionario o ex funcionario que incurrió

en el error y provocó el daño a un particular; teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes elementos:

- 1) cuando una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados o provocados a un particular;
- 2) cuando se hubiere establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex funcionario público;
- 3) cuando la entidad condenada ya hubiere cancelado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia; y
- 4) cuando esta se encuentre dentro del término para hacerlo, esto es que no haya operado la caducidad.

El accionar del Estado ecuatoriano frente a la reparación, que mediante sentencia se le impone para resarcir el daño a la víctima de las acciones u omisiones dolosas o culposas de sus servidores públicos, debe actuar conforme al Derecho y a la potestad que otorga la Constitución para que mediante la acción de repetición establecida en la ley pueda declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos.

Para algunos autores esta norma no es potestativa ni facultativa, es considerada más bien como un mandato de ejecución. Se debe mencionar que existe diferencia entre la acción civil de repetición entre los particulares, la administrativa y la penal. Hay que recordar que la acción de repetición no es renunciable, pues no se puede desistir sobre derecho ajeno, ya que afectaría el interés del pueblo al perjudicarlo económicamente. El Código Orgánico General de Procesos establece que, el competente para esta acción es la “Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial” (Asamblea Nacional, 2018).

El Estado asume que, los agentes públicos son órganos propios, integrantes de la estructura estatal; luego, la actuación u omisión de estos, que cause daño, es

imputable al mismo (Malo, 2017); luego, es responsabilidad directa del Estado cuando se ha producido un daño a un individuo, por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, en este caso la víctima posee el derecho a la reparación, la que estará a cargo del Estado.

Según Sarmiento (2018) y Muñoz Reinoso (2019), la acción de repetición posee una finalidad de interés público, que ayuda a la protección del patrimonio estatal, siendo un mecanismo útil para combatir la corrupción, la impunidad y recuperar lo perdido por el pago de la reparación a las víctimas de las malas actuaciones de los funcionarios públicos.

En resumen, el derecho de repetición es de carácter constitucional y es considerado como un mecanismo a través del cual el Estado tiende a resarcir la afectación que fue producida por las faltas graves o dolosas de sus funcionarios.

5. La reparación a los particulares que fueron perjudicados por los actos u omisiones de los servidores públicos, asumida por el Estado

La reparación en la doctrina se identifica como aquella acción que ayuda a reparar el daño, esta se encuentra estipulada en el derecho nacional e internacional; es un derecho que tiene la víctima a la que se le violentaron sus derechos, para que se resarza su afectación a la vez que se compensan las pérdidas sociales, morales y materiales, de esta manera les restituyen sus derechos.

Para Olano García (2015), el derecho de repetición constituye en una garantía que corresponde a la satisfacción de derechos, el restablecimiento de lo cancelado a la víctima y difusión de la verdad sobre lo sucedido; esto es una obligación jurídica del servidor público que cometió el error o vulneró el derecho de un particular. Por lo tanto, el deber del legislador es reparar el daño y prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos con la mayor efectividad posible.

La reparación integral es el pilar fundamental de la responsabilidad del

Estado, ya que su fin es resarcir al particular por los daños, sean materiales o inmateriales, sufridos por las inadecuadas actuaciones de los servidores públicos.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se explica que, en caso de producirse una violación a cualquiera de los derechos consagrados en la mencionada Convención, deben ser reparados con una justa indemnización a la víctima, es decir; si se produjo alguna violación debe ser reparada económica o moralmente (Asamblea General de la OEA, 1978, art. 63).

Hay que recordar que la reparación integral no solo se limita al resarcimiento económico, más bien su objetivo es enmendar los daños producidos por el servidor público para que la víctima pueda continuar con su vida dentro de la normalidad. La reparación debe estar enfocada a restablecer las cosas a su estado anterior a la producción del daño y en caso de que no sea factible, repararlo con otras medidas de resarcimiento.

Asimismo, la Corte Internacional de Derechos Humanos (1979) considera que para resarcir los daños de manera integral, además de las compensaciones pecuniarias, se deben tener en cuenta medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, las que tienen especial relevancia por los daños ocasionados. En esta normativa internacional se determina que, además de la reparación integral deben existir garantías, una de ellas la de no repetición.

Llegado a este punto es importante conocer cuáles son los tipos de reparación a los que tienen derecho las víctimas.

6. Tipología de la reparación

Entre las reparaciones posibles están la patrimonial, la no patrimonial y la integral.

Reparación patrimonial

En el ámbito jurídico la reparación patrimonial se considera como la indemnización de los perjuicios ocasionados principalmente por error

judicial o funcionamiento anormal de la administración pública (Romero, 2016).

A esta también se le reconoce como la reparación pecuniaria o económica, siendo la forma de reparación más común, direccionada a los daños sobre bienes de las personas, que en muchos de los procesos ya no es posible recuperar. Esta es considerada como una figura jurídica de reparación económica que ayuda a restaurar la situación legal de las personas transgredidas por aquellas acciones u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Reparación no patrimonial o no pecuniaria

Esta reparación tiene como finalidad reparar los daños morales ocasionados al particular, a través de las medidas restaurativas que son consideradas simbólicas por la ley; a saber, las disculpas públicas que se dan a través de un medio de comunicación de mayor circulación. Esta es una medida de aplicación de sanciones a la persona que produjo el daño, también pueden ser cualquier otra que no se relacione con compensaciones económicas.

Respecto a la reparación no patrimonial Affenni (2018) señala que, la naturaleza no patrimonial de los daños nace con la finalidad de salvaguardar los intereses lesionados que no son de naturaleza económica o patrimonial, pues no pueden ser valoradas económicamente y no son objeto de cambio.

Reparación Integral

La reparación integral tiene como propósito proporcionar a la víctima la restauración de los derechos vulnerados de manera integral; está encaminada a remediar los daños económicos, físicos y mentales sufridos a consecuencia de la actuación dolosa de parte de los agentes y funcionarios estatales, de esta forma los afectados deben ser indemnizados no sólo económicamente sino con otras medidas, como son las simbólicas, a través de las cuales se repara el daño moral afectado, pero de manera especial trata de que el daño no se repita (Corte Internacional de Derechos Humanos, 1979).

Para poder abarcar la reparación integral es preciso conceptualizar al Derecho. De acuerdo a Medina (2017), éste puede concebirse como rector del comportamiento de la sociedad, conformado por un conjunto de reglas que tienen estrecha relación con la conducta de los humanos, diseñadas y avaladas por las autoridades para proteger los intereses de la sociedad y sus miembros de forma individual y colectiva; de su cumplimiento se encargan las organizaciones políticas de cada Estado.

El Derecho rige las conductas individuales y grupales, sus reglas necesarias sirven de base para interpretar y llenar los vacíos normativos, indicando qué está bien o no, entonces el Derecho es una creación humana de carácter social y un medio de comunicación.

CONCLUSIONES

El análisis de los documentos normativos y de la bibliografía especializada en el tema del derecho de repetición permite concluir que:

- El Estado es responsable de las acciones y omisiones de sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, ya que son parte de él. Corresponde al Estado afrontar la reparación del daño provocado a los particulares por las malas actuaciones de los funcionarios o ex funcionarios, siempre y cuando esté dispuesto en sentencia dictada por la autoridad competente. La responsabilidad que adquiere el Estado se tipifica en civil, administrativa y penal.
- El derecho de repetición surge cuando el daño que se ha reparado es imputable a hechos, actos u omisiones de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos; este puede ser aplicado para recuperar la pérdida económica ocasionada al Estado. Entre las reparaciones posibles están: la patrimonial, la no patrimonial y las integrales.

- Aunque la responsabilidad del servidor público es reconocida en el Código Orgánico Administrativo, en el Código Orgánico General de Procesos, en el Código Orgánico de la Función Judicial y, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debería existir una tramitación especial para esta acción en una sola norma para todas las materias y según el caso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarado Verdezoto, J. F., & Melanie Nicole, P. A. (2021). Ejecución del acto presunto por silencio administrativo según la legislación y la jurisprudencia Ecuatoriana. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 13-28. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.111>
- Affenni, J. (2018). *Reparacion no pecuniaria*. Quito: Ediciones LDA.
- Asamblea General de la OEA. (18 de Julio de 1978). *Convención Americana de Derechos Humanos*. Pacto de San José de Costa Rica.
- Bernal Corredor, E. (2017). Responsabilidad extracontractual del estado por omisión en la actividad legislativa (Tesis de maestría). Corporación Universidad Libre. Bogotá. Colombia.
- Cabanellas, G. (1979). *Diccionario jurídico elemental*. Editorial Heliasta. <http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf>
- Corte Internacional de Derechos Humanos. (1979). *Declaración de los Derechos Humanos*. Corte Internacional de los Derechos Humanos.
- Durán Chávez, C. E., & Henríquez Jiménez, C. D. (2021). Principio de objetividad previsto en el código orgánico integral penal. Relación con el debido proceso. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 159-173. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.121>
- Ecuador. Asamblea Nacional (2009 a). *Código Orgánico de la Función Judicial. Responsabilidad del estado por error judicial*. Ecuador.
- _____. (2009 b). *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Acción de repetición*. Ecuador.
- _____. (2018). *Código Orgánico General de Procesos*. Ecuador.
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente (2008). *Constitución de la República del Ecuador 2008*. La acción de repetición.
- Espín, C. (2015). *La responsabilidad del Estado y el ejercicio del derecho de repetición*. Quito: USFQ.
- Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Conrado*, 16(75), 103-110.
- Gutiérrez Castillo, O., Tabares Neyra, L. & Pérez Hernández, L. (2019). Retos de la Administración Pública en Cuba. Universidad de La Habana, Cuba. *SciELO, Revista Universidad de La Habana UH*, no. 287 enero-junio.
- Hernández Fernández, L., Rodríguez Corría, R., Quintero Sarduy, N. & Domínguez Rodríguez, D. (2020). La responsabilidad civil en las relaciones jurídicas originadas por la prestación de servicios médicos. *Revista EDUMECENTRO*, 12(1), 222-237.
- Hernández Silva, A. (2008). La responsabilidad contractual del Estado: ¿Una responsabilidad sin imputación? Universidad Externado de Colombia. *Revista de Derecho Privado*, 14, enero-junio, 171-191. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=417537590006>
- Jiménez, W. (2013). Origen y Evolución de las Teorías sobre la Responsabilidad Estatal. Universidad Libre y ESAP.

- Bogotá D.C. Colombia. *Diálogos de Saberes*, No. 38, Enero – Junio, 63-78.
- Medina, J. (2017). *Derecho de personas*. Universidad del Rosario. Argentina.
- Malo, Z. (2017). *La ineficacia de la Acción de repetición en contra de los servidores públicos en la Legislación Ecuatoriana*. Quito: Universidad de las Americas.
- Muñoz Reinoso, M. (2019). Requisitos de procedencia de la acción de repetición, por la declaración de la responsabilidad extracontractual del estado, por actuaciones administrativas. (Tesis de maestría). Universidad Internacional SEK. Quito Ecuador.
- López Moya, D. F. (2021). Las políticas públicas como garantía de los derechos fundamentales. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 44–60. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.13>
- Olano García, H. (2015). *Trámite legal para el pago de obligaciones pecuniarias impuestas al Estado colombiano en decisiones sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario*. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N°. 137, 4.
- Pacori, J. (2017). Responsabilidad penal de los servidores públicos. *La Gaceta*, 6-8.
- Paredes, L. (2017). La responsabilidad contractual del estado. Cuenca: Editorial las américas S.A.T.
- Posada Urtusuástegui, A. (2006). *La responsabilidad civil del estado. Análisis de un caso hipotético*. México D. F.: CIDE.
- Romero, A. (2016). Clases de reparación y sus características. Argentina: Editorial de derecho R. A.
- Redrobán Barreto, W. E. (2021). Los Principios del Estado Constitucional de Derechos y Justicia en el procedimiento legislativo en Ecuador. *Sociedad & Tecnología*, 4(S1), 226–239. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.131>
- Sammartino, P. (2016). *Responsabilidad del estado: características generales del sistema legal vigente*. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: Acción de docentes.
- Sarmiento, D. (2018). Acción de repetición en el derecho constitucional ecuatoriano. Quito: Universidad Central del Ecuador
- Serrano Revelo, J. (2019). Jurídico en la determinación de responsabilidades en la acción de repetición. (Proyecto de investigación previa la obtención del título de abogado de los tribunales de la República). Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES. Ecuador.
- Tabares Neyra, L. (2017). *Administración pública local. Retos y perspectivas al calor del perfeccionamiento del Modelo Económico Cubano*. La Habana: Editorial Universitaria.